

Editorial

A Propósito de la Justicia Penal Colombiana del siglo XXI

Observando el estado en que se encuentra la sociedad colombiana en materia de control y seguridad, empezando desde la familia como núcleo de esta, y analizando el cumplimiento y aplicación de la ley en el marco penal, se puede inferir que el desorden que existe en el momento de dar cumplimiento al nuevo sistema penal acusatorio y la ley de las pequeñas causas como instrumento de política criminal; se detectan falencias de orden organizativo, administrativo y procesal en la práctica y ejecución de la ley.

Me refiero a la implementación de la Ley 906 del 2004 como reforma al sistema penal acusatorio y la ley 1153 del 2007 o ley de las pequeñas causas; cuya finalidad es, de la primera; que se agilicen los procesos penales, que hayan más garantías en los fallos y se descongestionen los juzgados superándose de esta manera la morosidad que conllevan los procesos escritos, y la segunda, es que se le pueda dar solución real al clamor de la ciudadanía colombiana de ejercitar libremente el derecho de locomoción sin ser víctima de un atentado contra la integridad personal o contra el patrimonio económico; esto sin adentrarnos a la política de seguridad democrática que es patrimonio social del actual gobierno.

Con base en lo anterior se puede analizar que desde el tiempo o año que entraron en vigencia las leyes citadas podemos ver que, según resultados de la investigación realizada por la estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad Simón Bolívar; Layla Vanesa Martínez Díaz en la ciudad de Barranquilla y refiriéndose a la morosidad en los casos atendidos y comprendido el concepto como todo lo que está por fuera del término establecido por la ley; se refirió, según la norma, **a la no existencia de morosidad puesto que ella trae consigo unas sanciones disciplinarias para aquellos funcionarios que no cumplan su función como el estado le ha asignado, así que la morosidad iniciando desde la captura del sindicado no puede existir; ya que son 36 horas que tiene el ente especializado para la legalización de la captura**; sin embargo en el caso de Barranquilla 15 sindicatos volvieron a la libertad ya que pasaron las 36 horas de haberse realizado la aprehensión de estos, no legalizaron la captura cometiéndose un delito en ellos. La ley dice que retener a una persona, aún siendo responsable de hecho o haber cometido el hecho en flagrancia, es un delito retenerla sin colocarla a disposiciones de las autoridades competentes: es por eso, que en este caso tenemos una

conducta morosa por parte de las autoridades encargadas de legalizar la captura.

De esos 15 sindicatos libres, se establecieron 15 sanciones por la negligencia y el no haber legalizado las capturas de estas personas sindicadas de haber cometido delitos; la cual se realizaron 15 sanciones disciplinarias. En consecuencia se puede decir que si existe morosidad en el nuevo sistema penal acusatorio muy a pesar que la instauración de la ley dice lo contrario.

Se reafirma entonces que el nuevo sistema penal acusatorio no ha tenido éxito en su implementación si se tiene en cuenta que el manejo que le están dando le faltaría una fundamentación teórica, práctica y educativa en los centros de servicios judiciales, a los propios funcionarios públicos, a los operadores judiciales y a otros funcionarios que tengan que ver con esta clase de procesos.

Se ha observado que a diario se presentan de 200 a 500 procesos, ante esto no hay suficientes salas de audiencias, la prioridad a casos urgentes, desorden judicial, falta de jueces de conocimiento, falta de personal calificado en el área y el orden logístico para sacar adelante la ley.

El otro caso es el de la ley 1153 del 2007 o ley de las pequeñas causas en materia penal, se implementó la ley con el fin de mantener a la ciudadanía segura y respetando su dignidad; esto quiere decir que se implementó para dar soluciones a lagunas problemáticas o conflictos sociales. La realidad que muestra Colombia es que se han incrementado considerablemente los índices de criminalidad convencional, sobre todo las conductas atentatorias contra la integridad personal y el patrimonio económico; siendo esta última la que más se muestra en nuestras ciudades y poblaciones, el raponazo, el fleteo, el asalto callejero, las estafas etc.; son comportamientos punibles considerados de poca monta, cuando de verdad se han desdibujado su verdadera connotación en el campo de la seguridad ciudadana y en la credibilidad en nuestra administración de justicia, generándose como es obvio un represamiento en casos penales en la fiscalía y por ende produciéndose una mora casi generalizada en la tramitación de los respectivos procesos.

Ante esto han surgido investigaciones de parte de estudiantes e investigadores como por ejemplo, la estudiante de Derecho de la Universidad Simón Bolívar Roxana Vargas Jiménez, cuyos aportes son valiosos y fundamentan este análisis.

En consecuencia las reformas a la justicia penal en Colombia no están manifestando los objetivos trazados o propuestos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materia de control y garantía como está escrito en la Constitución, amén de otros elementos que se dan debido a la situación político económica del país la ejecución o aplicación de la ley tiene falencias de tipo organizativas, funcionales y administrativas por parte de los actores que la ejecutan; reafirmando, entonces, aquello de que la ley se hizo para el más débil...

JAVIER MENDOZA DE LA ROSA

Editorial

In Purpose of the Century Twenty One Colombian Penal Justice

Observing the state of Colombian society about control and security, beginning with the family as the society's nucleus, and analyzing the performance and the application of the law in the penal field, then it can be suppose that a disorder exists at the moment of giving fulfillment to the New Accusatory Penal System and the Small Causes Law as an instrument of criminal politics. Organizational, administrative and prosecution failures are detected in the practice and execution of the law.

I refer to the implementation of the 906 law of 2004 as a reform of the Accusatory Penal System and of the 1153 law of 2007 or the Small Causes Law. The purpose of the 906 law of 2004 is to speed up the penal processes, to get better warranties in the rulings and to clear the courts. In this way the delay of the resolution of the written processes can be overcome. The purpose of the 1153 law of 2007 or the Small Causes Law is giving a real solution to Colombian citizenship's clamor of exercising with liberty the locomotion right, without being a victim of an outrage against the personal integrity or economical patrimony. The analysis of those laws is done without get in deeply to the democratic security politics which is currently social patrimony of the government.

On the basis of what was said above, it can be analyzed according to the results of the researching made in Barranquilla city by Layla Vanessa Martínez Díaz, a student of sixth semester on the Simón Bolívar University's Law School, that from the time or year when the 906 and 1153 laws came into force, the delay on the cases attended and the concept of "everything that is outside of the term established by the law", she referred, according to the rule, **the non existence of delay because this delay brings with it some disciplinary punishments for those government employees that do not fulfill with the duties that the state has assigned them. Then the delay beginning from the capture of the defendant cannot exist because there are 36 hours that the person responsible has to legalize the capture.**

However, in Barranquilla's case, 15 defendants came to the liberty because 36 hours passed after the apprehension of the defendants was done. The responsible people did not legalize the capture, and then they made an offense. The law says that maintaining a person under custody without putting it under disposition of the authorities is illegal, even being this person responsible because of the offense made in flagrancy. Because of this, this fact can be understood as a delay of the correct progress of the process by the people responsible of legalizing the capture.

From those 15 defendants set free, 15 punishments were established for negligence and for not have legalized the captures of these people that have been accused by making an offense. As a consequence, it can be said that in fact a delay exists in the New Accusatory Penal System, despite the fact that the law says the opposite.

It reaffirms then that the New Accusatory Penal System has not had success in its implementation bearing in mind that the management that is being given has lack of theoretical, practical and educational fundamentals in the judicial service centers, to the government employees, to the judicial operators and to the other employees that have something to see with those kind of processes.

Daily, from 200 to 500 of processes are presented and it is something that has been observed, against this there are not enough hearing rooms, the priority to emergency cases, judicial disorder, lack of judges with knowledge, lack of qualified staff in the area and the logistical order to get the law off the ground.

Another case is the one of the 1153 law of 2007 or the Small Causes Law in penal subject. This law was implemented with the aim of maintain the citizenship secure and respecting its dignity, it means that this law was implemented to give solutions to some problems or social conflicts. Colombian reality shows that the conventional criminality rates have been increased considerably, especially some behaviors that threaten against the personal integrity and the economical patrimony. The damage against the economical patrimony is the most suffered by the people in Colombian cities and towns, the purse-snatching, the pickpocket, the street robbery, the fraud, etc, are punishable behaviors considered as low-class behaviors. In matter of citizenship's security and the credibility in our justice administration, to the punishable behaviors have been quit their true connotation. This has generated an obvious blocking of the penal cases in the district's attorney and because of that a big delay is produced in the processing of the respective processes.

Due to this, research has emerged from the students and researchers like for example, the student of the Simón Bolívar University's Law School, Roxana Vargas Jiménez who has given valuable contributions that base this analysis.

As a consequence, the reforms to the penal justice in Colombia are no expressing the objectives made or proposed to improve the life quality of the citizens about control and warranty as it is written in the Constitution. Amen to other elements that are given due to the political-economical situation of the country. Organizational, administrative and prosecution failures are detected in the practice and execution of the law due to the responsible people of this duty. Then, this affirms that the law was made for the weak...

JAVIER MENDOZA DE LA ROSA